

Correo Argentino Suc. 43 (B)	FRANQUEO A PAGAR Cuenta N° 420

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE SENADORES DE LA NACION

58ª REUNIÓN — 25ª SESIÓN ORDINARIA — 8 DE FEBRERO DE 1995

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor **EDUARDO MENEM**,

y del señor vicepresidente 1º del Honorable Senado,
ingeniero **FAUSTINO M. MAZZUCCO**

Secretarios: doctor **EDGARDO RENÉ PIUZZI** y señor **EDGARDO P. V. MURGUÍA**

Prosecretarios: señor **JUAN JOSÉ CANALS** y doctor **DONALDO ANTONIO DIB**

PRESENTES:

AGUIRRE LANARI, Juan R.
ALASINO, Augusto
BITTEL, Deolindo F.
BORDÓN, José O.
BRANDA, Ricardo A.
BRITOS, Oraldo N.
CABANA, Fernando V.
CAFIERO, Antonio F.
CENDOYA, Jorge J.
COSTANZO, Remo J.
FADEL, Mario N.
FIGUEROA, José O.
GENOUD, José
JUÁREZ, Carlos A.
LEÓN, Luis A.
LOSADA, Mario A.
LUDUEÑA, Felipe E.
MAC KARTHY, César
MARTÍNEZ ALMUDEVAR, Enrique M.
MASSAT, Jorge
MAZZUCCO, Faustino M.
MENEM, Eduardo
MOLINA, Pedro E.
PEÑA de LÓPEZ, Ana
RIVAS, Olijela del Valle
ROMERO, Juan Carlos

ROMERO FERIS, José A.
SAN MILLÁN, Julio A.
SOLANA, Jorge D.
SOLARI YRIGOYEN, Hipólito
STORANI, Conrado H.
VACA, Eduardo P.
VERNA, Carlos Alberto

AUSENTES, CON AVISO:

BRAVO, Leopoldo
HUMADA, Julio C.
LAFFERRIÈRE, Ricardo E.
MARTÍNEZ, Daniel E.
MIRANDA, Julio
OYARZÚN, Juan Carlos
SÁNCHEZ, Libardo N.
SAPAG, Felipe R.
SNOPEK, Guillermo E.
VILLARROEL, Pedro G.

EN COMISION:

DE LA RÚA, Fernando
RUBEO, Luis

CON LICENCIA:

AVELIN, Alfredo

POR ENFERMEDAD:

OTERO, Edison

al escritor Mario Vargas Llosa (S.-1.516/94). Se aprueba. (Pág. 5985.)

22. Consideración del dictamen de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios en las modificaciones introducidas por la Honorable Cámara de Diputados en el proyecto de ley que le fuera pasado en revisión por el que se modifica el Código Penal en lo que respecta al adulterio (S.-502/93). Se aprueba. (Pág. 5986.)
23. Consideración del dictamen de las comisiones de Interior y Justicia y de Derechos y Garantías en el proyecto de comunicación del señor senador Losada por el que se solicita que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, informe acerca de disposiciones que limiten el ingreso de legisladores a las unidades penitenciarias (S.-1.095/94). Se aprueba. (Pág. 5987.)
24. Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de comunicación del señor senador León por el que se solicita se deje sin efecto el decreto 1.180/94 (pago de sueldo de las Fuerzas Armadas a través del sistema bancario) (S.-1.448/94). Se aprueba. (Pág. 5988.)
25. Consideración del dictamen de la Comisión de Defensa Nacional en el proyecto de comunicación del señor senador Avelín por el que se solicitan informes acerca de la convocatoria de voluntarios para el servicio militar (S.-1.526/94). Se aprueba. (Pág. 5989.)
26. Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General, de Interior y Justicia y de Trabajo y Previsión Social en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se sustituye el artículo 106 de la ley 18.345, organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, respecto a la inapelabilidad por razón de su monto (P.E.-444/94). Se aprueba. (Pág. 5990.)
27. Moción del señor senador Branda para que vuelva a comisión el dictamen de las comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Economía en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se sustituye el artículo 137 de la ley 19.551 en relación a entidades aseguradoras en liquidación (P.E.-441/94). Se aprueba. (Página 5991.)
28. Consideración del dictamen de las comisiones de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios y de Legislación General en dos proyectos de ley en revisión y en tres proyectos de ley de los señores senadores Alasino, Branda y de la Rúa, respectivamente, por los que se modifican el Código Penal y el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (C.D.-104/93 y 76/94; S.-701, 792 y 804/93). Se aprueba un proyecto de ley en revisión. (Página 5993.)
29. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Peña de López por el que se solicita se

otorgue un subsidio para la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, filial Formosa (ATSA), destinado a un segundo curso de auxiliares de enfermería (S.-714/94). Se aprueba. (Pág. 5998.)

30. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Peña de López por el que se solicita se otorgue un subsidio para la Unión de Jubilados y Pensionados de Formosa (S.-713/94). Se aprueba. (Pág. 5999.)
31. Consideración del dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador Bravo por el que se solicitan informes sobre el déficit mensual de las cajas previsionales de las provincias (S.-349/94). Se aprueba. (Pág. 6000.)
32. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo con el Gobierno de Canadá para la Cooperación en los Usos Pacíficos de la Energía Nuclear, suscripto en Ottawa, Canadá, el 21 de junio de 1994 (P.E.-440/94). Se aprueba. (Página 6000.)
33. Consideración del dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Acuerdo de Cooperación en Materia de Telecomunicaciones celebrado con el gobierno de la República de Colombia, suscripto en Bogotá, Colombia, el 22 de febrero de 1994 (P.E.-421/94). Se aprueba. (Pág. 6001.)
34. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Economías Regionales y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación del señor senador San Millán por el que se solicita la participación de las provincias en la elección de los productos a exceptuar del arancel externo común en el marco del Tratado del Mercado Común del Sur (S.-828/94). Se aprueba. (Pág. 6004.)
35. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Obras Públicas en el proyecto de comunicación del señor senador Snopek por el que se solicita se acuerde con el gobierno de Bolivia la habilitación del paso fronterizo y camino carretero que une Ciénaga de Paicone con Río Mojón y San Antonio de Esmoruco (S.-708/94). Se aprueba. (Pág. 6004.)
36. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Derechos y Garantías en el proyecto de declaración del señor senador de la Rúa por el que se condena el atentado perpetrado contra la sede del consulado de Israel en Londres el 26 de julio de 1994 (S.-622/94). Se aprueba con modificaciones. (Pág. 6005.)
37. Consideración del dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Asistencia Social

cio después de trabada la litis y a pedido del actor, el juez podrá disponer la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuese verosímil y previa caución por los eventuales daños y perjuicios que se puedan irrogar.

Art. 2º — Sustitúyese el artículo 181 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 181: Será reprimido con prisión de seis meses a tres años:

1. El que por violencia, amenazas, engaños, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.
2. El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo.
3. El que, con violencia o amenazas, turbare la posesión o tenencia de un inmueble.

Art. 3º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ACLARACION

Los antecedentes de la presente sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponden a varios proyectos de ley presentados por distintos señores diputados.

II

Sanción de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación

(26 de octubre de 1994)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º — Sustitúyese la rúbrica del capítulo VI del título VI del libro segundo del Código Penal "Usurpación" por "Usurpación e intrusión".

Art. 2º — Incorpórase como artículo 181 bis del Código Penal el siguiente:

Artículo 181 bis: Será reprimido con prisión de un mes a un año el que, sin recurrir a los medios de comisión previstos en el artículo 181, ocupe un inmueble sin autorización fehaciente del propietario, poseedor o tenedor.

Al comprobarse la falta de autorización, a pedido del damnificado, el juez deberá ordenar el desalojo del ocupante y la entrega del inmueble al propietario, poseedor o tenedor, previa caución por los eventuales daños y perjuicios que se pueda irrogar.

Art. 3º — Incorpórase como artículo 181 ter del Código Penal el siguiente:

Artículo 181 ter: Será reprimido con prisión de un mes a dos años, el que habitualmente instigare a otros a cometer delitos previstos por los artículos 181 y 181 bis.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

ALBERTO R. PIERRI.
Esther H. Pereyra Arandía
de Pérez Pardo.

ACLARACION

El antecedente de la presente sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley presentado por el señor diputado Pascual y otros.

III

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º — Modificase el inciso 1 del artículo 181 del Código Penal, el que quedará redactado de la siguiente manera:

El que por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Augusto Alasino.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La sociedad argentina se ha sacudido en estos últimos días por varios sucesos. Numerosos propietarios han sido despojados de sus inmuebles sin que tales usurpaciones recibieran el condigno castigo que le corresponde.

Es así que en muchos casos los autores de estos ilícitos no son castigados, porque la conducta cometida por ellos no se encuentra debidamente tipificada en el Código Penal.

Sucede que el artículo 181, que protege la propiedad, ha recibido muchas modificaciones durante la vigencia del código, entre las que cabe destacar las de las leyes 17.567 y 21.338, leyes que actualizaron la figura de

la usurpación, haciéndolo más preciso, pero que lamentablemente, por la época en que se sancionó, también incluía normas represivas protectoras del sistema impositivo, pero que lejos distaban de proteger el derecho de propiedad.

La necesaria derogación de estas normas hizo que sin proponérselo, se derogaran artículos armónicos y muy bien redactados, aptos para el castigo de determinados delitos. En este sentido, la ley 23.077 dio un paso atrás al volver al código originario, pues el texto derogado (ley 21.338) evitaba una serie de dificultades a las que da lugar su actual redacción, sobre todo en cuanto a los medios comisivos, según señala Fontán Balestra en su obra *Derecho penal*, parte especial, editado en 1991, página 592.

En efecto, el artículo 181, inciso 1 vigente no incrimina determinadas formas de despojo, tales su modalidad parcial, la clandestina o la permanencia en el inmueble sin llegar a desalojar a sus habitantes.

Este tipo de conductas no penalizadas hace impunes a los agentes que perpetran estas ilicitudes, quedándoles a los verdaderos propietarios solamente idónea la vía civil para recuperar la posesión de sus inmuebles o bien, la peligrosa utilización del artículo 2.470 del Código Civil, que legitima la acción por mano propia.

Con la modificación que introducimos también evitaremos que sobre el punto nazca una controversia jurisprudencial que torne aleatorios los derechos consagrados por la Constitución Nacional.

Augusto Alasino.

IV

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º — Modifícase el inciso 1 del artículo 181 del Código Penal, el que será sustituido por el siguiente:

Artículo 181: Será reprimido con prisión de tres meses a tres años:

1. El que, por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad, despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, aunque el titular del derecho no lo habitare, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él, expulsando a sus ocupantes o no dejándolos volver a ejercitar tales derechos por esos medios.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Ricardo A. Branda.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La cada vez mayor ocurrencia de actos de usurpación de la propiedad inmueble cometidos, especial-

mente en la ciudad de Buenos Aires y en otros lugares del denominado "Gran Buenos Aires", así como en otras ciudades del interior del país, nos lleva a realizar la presente modificación al Código Penal, evitando así los graves hechos de usurpación de la propiedad inmueble.

Los innumerables casos de usurpación de inmuebles que se han llevado a cabo en nuestros días por parte de personas, grupos y hasta asociaciones ilícitas formadas para ese fin, que, abusando de esas necesidades sociales de gente inocente, se dedican inescrupulosamente a perpetrar con violencia o clandestinidad, actos de despojo de esos inmuebles, que se encuentran momentáneamente desocupados o no utilizados por sus legítimos poseedores o tenedores, asimismo, en muchos casos, esos individuos celebran fraudulentamente contratos de alquiler simulando ser los autorizados legítimos para hacerlo, con la gente necesitada, que obra con o sin conocimiento de la verdad de los hechos.

De esta forma, en muchos casos, hasta se multiplican las víctimas del obrar delictuoso de esas asociaciones ilícitas, ya que a los originarios propietarios poseedores o tenedores de los inmuebles usurpados, se suman posteriormente las pobres familias que, algunas veces, pagan sumas de dinero en concepto de señas, adelantos de precios de las locaciones que ellos creen legítimas.

Resulta pues urgente y necesario, en un estado de derecho, luchar con todo el poder de la ley, contra esos delincuentes que se dedican a incrementar el número de víctimas de esta grave situación social que padece actualmente nuestro país.

Es por ello que proponemos esta reforma, la que dotará de un sistema penal más idóneo, que el vigente, a efectos de que la misma prueba pueda brindar una solución al problema social que nos ocupa. Por supuesto que al peticionar de este modo, no se nos escapa que las posibilidades de la legislación penal son relativas, obviamente; pero también conocemos que las normas sanamente represivas son la última herramienta que puede utilizarse en un régimen jurídico en un Estado democrático y que si no es usada como corresponde provoca, a no dudarlo, una impunidad que constituye un factor criminógeno y la causa del renacimiento del ejercicio del derecho por mano propia que está a un paso siempre de la venganza privada salvaje.

Por todo lo expuesto, proponemos en concreto que se modifique el actual régimen penal del delito de usurpación de propiedad del inmueble, ampliando los medios comisivos de este delito. Para lo cual resulta imprescindible agregar en esta reforma las formas específicas de amenazas y de clandestinidad, supuesto este último, por ejemplo, que más frecuentemente ocurre en este momento en la Capital Federal.

A la vez, se propone en la presente modificación, que el despojo —núcleo del tipo penal de que se trata— se considerará delictivo sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a sus ocupantes o no dejándolos volver a ejercitar tales derechos por esos medios, asimismo frente a una interpretación jurisprudencial imperante

en la actualidad resultaría útil la exigibilidad de la posesión o tenencia efectiva del inmueble por parte de la víctima, aunque el titular del derecho no lo habilitare efectivamente. De esta manera se aclararía la confusión existente en la interpretación de los tribunales penales al identificar las instituciones de posesión o tenencia con habitación efectiva.

Y, por fin, aumentando la pena fijando la escala penal entre tres meses y tres años.

Ricardo A. Branda.

V

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados...

Artículo 1º — Sustituyese el artículo 181 del Código Penal por el siguiente:

Artículo 181: Será reprimido con prisión de un año a tres años:

1. El que por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despojare a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.
2. El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo.

La pena será de seis meses a dos años cuando, con violencia o amenazas, se turbare la posesión o tenencia de un inmueble.

Art. 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Fernando de la Rúa.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Han conmovido hondamente a nuestra sociedad los hechos sucedidos durante la última semana del mes de julio del año en curso, que involucran a los ocupantes de la ex bodega Giol, como así también a los ocupantes de otros inmuebles.

En ese sentido, el diario "Clarín" del día 23 de julio de este año, comunicó que el presidente de la República había dado directivas "terminantes" al jefe de la Policía Federal, comisario Jorge Passero, para actuar "compulsivamente", sin esperar el pronunciamiento de la Justicia, y desalojar los inmuebles y predios ilegalmente ocupados en la Capital Federal.

Este hecho constituye, sin duda, una flagrante violación a las garantías constitucionales de la defensa en juicio y la inocencia, consagradas en el artículo 18 de la Carta Magna, como así también una ilegítima pretensión de asumir la suma del poder público, hecho que, además de recordar épocas preteritas afortunada-

mente superadas, configura un flagrante abuso de autoridad intolerable en un estado de derecho.

Tan negativa fue la reacción de la sociedad frente a tamaña decisión, que el día viernes 30 de julio, el mismo presidente de la Nación, por el mismo diario "Clarín" anunció que "no se tolerarán acciones policiales al margen de las decisiones de la Justicia".

Estos dramáticos hechos, han reavivado el debate en torno a la problemática general de la vivienda, que exhibe numerosas aristas, que se extienden desde la ineficacia de los programas de promoción de vivienda para sectores de escasos recursos, la inexistencia de una red de salvataje mínima que pueda dar respuesta a las emergencias habitacionales, hasta la falta de medidas de prevención de los delitos que afectan los derechos de propiedad inmueble y la impotencia de la Justicia tanto para reprimir las conductas delictivas antes señaladas como para restituir las cosas a su estado anterior.

El problema, sin duda, es grave. Así lo ha reconocido el gabinete nacional anunciando que faltan tres millones doscientas mil viviendas.

Asimismo, ciento veintiséis mil doscientas veinticinco personas viven en inmuebles ocupados "de hecho" en la Capital y el Gran Buenos Aires; treinta mil trecientas ochenta y seis familias son las que están en esta situación; cuatro mil seiscientos ochenta y un hogares compuestos por diecisiete mil cuatrocientos sesenta y siete personas en esas condiciones están en la Capital Federal; veinticinco mil quinientos veinticinco hogares con ciento ocho mil setecientos cincuenta y ocho personas se distribuyen en el Gran Buenos Aires.

Un sesenta y siete por ciento de los ocupantes ilegales del Gran Buenos Aires vive, de acuerdo al censo de 1991, en casas precarias, ranchos o casillas; el cincuenta y cinco por ciento de los ocupantes ilegales de la Capital vive en departamentos o "conventillos"; un uno con treinta y siete por ciento de los habitantes del Gran Buenos Aires son ocupantes ilegales; un cero con sesenta y uno por ciento de los habitantes de la Capital Federal están en esa condición.

Tres son los partidos del Gran Buenos Aires con más casos de ocupantes ilegales: La Matanza, Lomas de Zamora y General Sarmiento.

La solución del problema, como puede verse, requiere de un enfoque múltiple, siendo conscientes de que una reforma legislativa no es la panacea para las familias que actualmente están "sin techo". Pero consideramos nuestra obligación —y así lo hemos asumido— proceder a llenar el vacío legal existente en la ley penal vigente, incorporando al artículo 181 del Código Penal, que prevé y reprime el delito de usurpación, la "clandestinidad" como uno de los modos de su comisión, teniendo en cuenta que la gran mayoría de las ocupaciones ilegales de vivienda presentan esta modalidad.

La norma cuya reforma pretendemos corresponde al texto originario del Código Penal argentino, ley 11.179 (texto ordenado en 1984) y reformado en dos oportunidades en 1967 y 1976. Estas reformas, a su vez, fueron dejadas sin efecto en 1973 y en 1984, respectivamente.

La reforma del año 1967 (ley 17.567) fue sancionada el 6-12-67 sobre la base de un proyecto preparado por

los juristas Sebastián Soler, Carlos Fontán Balestra y Eduardo Aguirre Obarrio, que modificó numerosos artículos del Código, elevando la pena del artículo 181 a una escala que oscila entre los seis meses y los tres años, incluyendo expresamente las amenazas y agregando la clandestinidad como otro medio de comisión.

Asimismo, en el año 1976, se sancionó la ley 21.338, que cita como fuente a la reforma antes citada y, en la figura que nos ocupa, agrega nuevamente las amenazas y la clandestinidad, reitera el aumento de la pena y, como novedad, mejora la redacción del artículo al dejar de lado la enumeración de derechos reales que la norma original traía, para referirse en forma general al ejercicio de un derecho real constituido sobre un inmueble y aclarar que el despojo puede cometerse invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes, quedando la norma redactada de la siguiente manera:

Será reprimido con prisión de un año a tres años:

1. El que por violencia, amenazas, engaño, abuso de confianza o clandestinidad despojar a otro, total o parcialmente, de la posesión o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real constituido sobre él, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, manteniéndose en él o expulsando a los ocupantes.
2. El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los términos o límites del mismo.

La pena será de seis meses a dos años cuando, con violencia o amenazas, se turbare la posesión o tenencia de un inmueble.

Las reformas de los años 1967 y 1976 tuvieron por objeto superar las contradicciones doctrinarias y jurisprudenciales suscitadas respecto del artículo 181 original, que ahora se reiteraron ante el restablecimiento de la norma por la Ley de Defensa de la Democracia 23.077. En ese sentido, la mayoría de la doctrina opina que la norma vigente no incluye el despojo clandestino.

Más allá de las objeciones de orden político-constitucional que encierran las leyes sancionadas en períodos de facto, razones de técnica legislativa tornan aconsejable la adopción de esa redacción, porque lo que hoy nos interesa es defender la propiedad privada del modo clandestino de usurparla.

En este sentido, existe una gran diferencia entre los distintos modos de usurpar un inmueble y la clandestinidad propiamente dicha: en cuanto a la violencia, parece innecesario resaltar la diferencia; el engaño, por su parte, debe ser entendido con la misma significación asignada a la estafa como uno de los medios para defraudar; y el abuso de confianza, se manifiesta corrientemente en la interversión de título.

Estos modos de comisión se diferencian de la clandestinidad en que la misma se configura a través de actos ocultos, subrepticios, en ausencia del poseedor o tenedor o con precauciones para evitar que quienes tenían derecho a oponerse tomaran conocimiento (Cámara Nacional Civil, Sala C, "La Ley", 92-110). En ge-

neral se dice clandestina la toma de posesión de manera furtiva u oculta (Cámara Nacional Civil, Sala E, "La Ley", 92-3).

La reforma que hoy propiciamos, si bien significa un notorio avance para erradicar la ocupación clandestina, debe ser integrada por otras normativas que contribuyan a la prevención de estos hechos. En todo estado moderno se procura, más que la represión —que lamentablemente es las más de las veces ineludible—, la prevención de las conductas disvaliosas. A este respecto, podemos hacer mención a que el procedimiento civil, a través de los interdictos posesorios, si bien su trámite es sumarisimo, la realidad nos muestra que los mismos devienen en procesos lentos, donde el lanzamiento a veces tarda años en resolverse.

Es por ello y a esos efectos, que creemos y estamos convencidos de la necesaria implementación de un registro de contratos de locación, como carga del locatario, a los efectos de la oponibilidad frente a terceros de los derechos emergentes del contrato.

Esta solución, a más de ser integrativa del concepto de la clandestinidad (ya que la falta de registración constituiría presunción en contra de quien alega un eventual derecho a ocupar), sería coherente con la posibilidad que el nuevo Código Procesal Penal de la Nación (y la mayoría de los códigos provinciales) ofrece al imponer al juez un término perentorio para el dictado del auto de procesamiento, presupuesto ineludible para la orden de lanzamiento de los intrusos.

Convencidos de la necesidad de esta reforma, es que ponemos este proyecto a vuestra consideración y posterior aprobación.

Fernando de la Rúa.

Sr. Presidente (Menem). — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: voy a hablar muy brevemente para informar el dictamen en consideración y que vamos a votar dentro de unos instantes.

Creo necesario decir concretamente, en ausencia del señor senador Alasino, que se trata de una modificación al artículo 181 del Código Penal, que reprime el delito de usurpación. Al respecto, hay coincidencia en aprobar la sanción que diera oportunamente la Cámara de Diputados teniendo en cuenta proyectos de similar tenor presentados en su momento por los señores senadores de la Rúa, Branda y Alasino.

A través del artículo mencionado se incorpora la clandestinidad como una de las modalidades comisivas del delito de usurpación haciendo mucho más eficaz la persecución de este delito toda vez que en los numerosos procesos por usurpación había un sinnúmero de ocasiones y de casos en los que era muy difícil sancionar a los responsables de este ilícito.

Además de incorporar el concepto de la clandestinidad en la figura, se incorpora también el concepto de la usurpación parcial de un inmueble así como también la usurpación del ejercicio de un derecho real, no simplemente de la posesión o la tenencia de un inmueble.

De tal manera, señor presidente, al entender que mejoramos notablemente la definición de este tipo penal de la usurpación, solicito el voto favorable de este proyecto.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes, del bloque liberal.

Sr. Aguirre Lanari. — Señor presidente: quiero hacer notar la existencia de observaciones con respecto a este proyecto.

En primer lugar, porque no se ha tenido en consideración una iniciativa de mi autoría en esta materia que lleva el número S.-312/94, presentado el 8 de junio de 1994, por la que se incorpora al Código Procesal, Civil y Comercial de la Nación el artículo 680 bis.

En segundo término, porque considero que el texto venido en revisión de la Cámara de Diputados podría presentar, a mi juicio, dos defectos.

Por un lado, se limita el artículo 680 bis a la acción de desalojo dirigida contra un intruso. Aquí debería agregarse, según mi parecer, la figura del tenedor precario, como yo lo proyecté en la iniciativa a la que acabo de referirme anteriormente. Digo esto porque tanto el intruso como el tenedor precario carecen de un título válido para permanecer ocupando el inmueble una vez que hubiera sido reclamada la respectiva devolución.

Por otra parte, el texto que vamos a considerar tiene una dificultad interpretativa que conviene tener en cuenta.

Aquí se habla de traba de la *litis*. Si por traba de la *litis* se interpreta, como dice parte de la doctrina procesalista, que se fije la contestación de la demanda, bastaría con que el demandado no se presentara a contestarla; así, no quedaría establecida la vigencia de este requisito. Si en cambio nosotros entendemos que podría aplicarse otro criterio procesalista, la traba de la *litis* se verificaría con la mera notificación del demandado y entonces resultaría que el actor podría pedir la entrega del inmueble y el juez disponerla, sin escuchar previamente al accionado. Entonces, qué pasaría en tal supuesto si el demandado, por ejemplo, contesta la demanda y acompaña un contrato de locación.

Yo creo que el espíritu de la norma apunta a que el juez pueda disponer la entrega precau-

toria e inmediata del inmueble del actor, ya sea cuando contestada la demanda aparezca como verosímil su derecho, o bien cuando el demandado no conteste la demanda y hubiera vencido el término fijado para hacerlo.

Por lo expuesto, voy a proponer que se sustituya el texto del artículo 680 bis del Código Procesal Civil, según el artículo 1º del proyecto que estamos considerando, por el texto del proyecto de mi autoría presentado el 8 de junio de 1994, en el que se contemplan estos aspectos que he señalado.

Por eso pongo en consideración de los señores senadores el texto, que dice así: "En los casos que la acción de desalojo se dirija contra tenedor precario o intruso [es decir, agrego 'tenedor precario'], en cualquier estado del juicio, una vez contestada la demanda [trabada la *litis*], o vencido el plazo para hacerlo [que es el otro concepto vinculado con la traba de la *litis* al que me referí], a pedido del actor, el juez dispondrá la inmediata entrega del inmueble si el derecho invocado fuera verosímil, previa caución real por los eventuales daños y perjuicios que se pudiesen irrogar. El juez deberá meritar, al ordenar la medida, los perjuicios que pudiese ocasionar al accionante la demora en la inmediata devolución del inmueble".

Finalmente, señor presidente, quiero mencionar el artículo 2º del proyecto, que se refiere al artículo 181 del Código Penal, al cual presto mi adhesión.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Mendoza.

Sr. Genoud. — Señor presidente: simplemente deseo señalar que el artículo 680 bis que se incorpora al Código Procesal Civil y Comercial tiene la redacción que está contenida en el dictamen en función, en primer lugar, de un concepto mucho más restrictivo que el que propone el señor senador por Corrientes, que quiere extender la aplicación de esta norma al tenedor precario, no solamente al caso del intruso, al que hace referencia el artículo 680 bis, tal cual pretendemos su incorporación en el Código Procesal.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la entrega del inmueble a pedido del accionante por parte del juez, se hace siempre bajo caución de los eventuales daños que pueda causar la medida. De tal modo que se elimina toda posibilidad de perjuicio económico a quien pueda resultar injustamente despojado de su inmueble por vía de la decisión judicial.

Sr. Aguirre Lanari. — Por eso yo agregaba lo referido a la caución legal.

Sr. Presidente (Menem). — La Presidencia ruega a los señores senadores que no dialoguen.

Sr. Genoud. — El bloque radical entiende que corresponde la aprobación del artículo 680 bis tal cual está redactado, lamentando la ausencia del señor presidente de la Comisión de Asuntos Penales y Regímenes Carcelarios, el senador Alasino, que a la vez representa al bloque de la mayoría.

Sr. Aguirre Lanari. — Pido una interrupción.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

Sr. Aguirre Lanari. — Entiendo que debe merituar en favor del rechazo de la modificación que propongo el deseo de no postergar la sanción legal, la cual, evidentemente, tiene un buen objeto y coincide parcialmente con el proyecto que yo oportunamente presenté.

Pero descontando que la voluntad de los bloques mayoritarios significará la sanción de la iniciativa sin atender a la modificación que propongo, pido, cuanto menos, una interpretación del Senado con respecto a lo que entiende cuando se habla de la traba de la *litis*.

Recién he explicado que hay dos conceptos sobre esta cuestión: uno puede ser lesivo al propósito que se persigue, si entendemos que debe ser contestada la demanda, porque si ésta no se contesta no se llega a trabar la *litis*.

En cambio, si nosotros establecemos que por el vencimiento del término después de notificada la demanda se considera trabada la *litis*, que es el otro concepto procesalista al que me he referido, quizás pueda esto servir cuanto menos como interpretación auténtica de lo que propone el proyecto de ley que estamos discutiendo.

Sr. Solana. — Pido la palabra.

Sr. Presidente (Menem). — Tiene la palabra el señor senador por el Neuquén.

Sr. Solana. — Señor presidente: limitada la observación del señor senador por Corrientes simplemente a establecer un criterio para determinar cuándo está trabada la *litis*, pienso que se trata de una cuestión puramente teórica y que sería casi inoficiosa una declaración del Senado al respecto porque sea por un motivo u otro, sea por una de las teorías que se sostienen o por la otra, queda trabada la *litis*.

Por otra parte, si no se contesta la demanda y queda en rebeldía el demandado, queda trabada la *litis*. De manera que en estos términos me parece que el proyecto que vamos a votar es absolutamente claro. Lo demás es cuestión de decisión judicial.

Sr. Presidente (Menem). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

— La votación resulta afirmativa.

— En particular es igualmente afirmativa.

Sr. Presidente (Menem). — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se harán las comunicaciones correspondientes.

29

SUBSIDIO PARA LA ASOCIACION DE TRABAJADORES DE LA SANIDAD ARGENTINA, FORMOSA

Sr. Presidente (Menem). — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de comunicación de la señora senadora Peña de López por el que se solicita un subsidio para la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, filial Formosa (ATSA), destinado a un segundo curso de auxiliares de enfermería. (Orden del Día N° 1.114.)

Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Piuze). — (Lee)

Dictamen de comisión

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de comunicación de la señora senadora Peña de López (S-714/94), solicitando se otorgue un subsidio a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, filial Formosa (ATSA), destinado a un segundo curso de auxiliares de enfermería; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.

De acuerdo con los términos del artículo 119 del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, 6 de diciembre de 1994.

Orlando N. Britos. — Juan C. Romero. —
Luis A. León. — Julio A. San Millán. —
José Genoud. — Jorge J. Cendoya. — Hipólito Solari Yrigoyen. — Eduardo P. Vaca. — Felipe E. Ludueña. — Antonio F. Caffero.

Proyecto de comunicación

El Senado de la Nación

Vería con agrado, que el Poder Ejecutivo, a través de la Subsecretaría de Formación Profesional del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —de acuerdo a la resolución 331/94— y/o por intermedio de los organismos que correspondan, otorgue un subsidio a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, filial Formosa (ATSA), a fin de obtener el monto correspon-